

Centralismo, nacionalismo e integración*

CLAUDIO VÉLIZ es el Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Entre 1962 y 1965 ocupó el cargo de *Senior Research Fellow* en el *Royal Institute of International Affairs*, de Londres. Es autor de una *Historia de la Marina Mercante de Chile* (Santiago, 1961), y dirigió la preparación de *Obstacles to Change in Latin America* (Londres, 1965), *The Politics of Conformity in Latin America* (Londres, 1967) y *Latin America and the Caribbean, a Handbook* (Londres, 1968).

Es tentador tratar de establecer una correlación ejemplarizante entre algunos de los más importantes procesos modernos de integración y un ritmo de crecimiento económico satisfactorio. Los casos de Alemania y Estados Unidos son aparentemente decisivos en este sentido. Sin embargo, un examen de estas situaciones históricas no lleva necesariamente a conclusiones tranquilizadoras puesto que ninguna excluyó absolutamente el uso de la fuerza o de la amenaza militar. Incluso la creación de la actual Comunidad Económica Europea es difícil de concebir sin la presencia de factores políticos tan decisivos como el temor a la Unión Soviética o al resurgimiento militar de Alemania.

La evidente intención de muchos latinoamericanos de llevar adelante un proceso de integración y desarrollo económico sin utilizar argumentos militares es, por consiguiente, singularmente atractiva. Dejando de lado el problema de si estos países podrán integrarse sin antes haber obtenido un grado adecuado de desarrollo económico nacional, vale la pena prestar atención a las posibles proyecciones que sobre la disposición pacífica de quienes buscan la integración puedan tener en el futuro factores como el resurgimiento nacionalista y el acentuamiento del centralismo político.

Hasta hace muy poco podía aun estimarse que la integración latinoamericana no tenía opositores porque no amenazaba a nadie: carecía de significación política real. Mientras sus postulados permanecían en el terreno retórico, todos aplaudían pero, cuando las declaraciones de principios fueron sucedidas por exigencias concretas, surgieron también núcleos de oposición que ya están obstaculizando la marcha del proceso. Además de la oposición decidida de algunos grupos influyentes de empresarios privados,

*Este ensayo está basado en un trabajo que el autor presentó ante el VII Congreso de la Sociedad Interamericana de Planificación celebrado en Lima en octubre de 1968. Una primera versión del mismo apareció publicada en *Foreign Affairs* del mismo mes. Esta publicación se hace, desde luego, con la autorización correspondiente.

especialmente en Venezuela, se podría argumentar que entre los principales obstáculos a la integración latinoamericana como fue planteada hace casi una década, deberán contarse el centralismo político y el nacionalismo. Al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, es también posible argumentar que cualquiera forma que adopte el proceso integracionista en el futuro próximo, sólo tendrá éxito en la medida que incorpore y utilice las fuerzas y tendencias asociadas tanto con el centralismo como con el nacionalismo resurgentes en América Latina.

*

Durante más o menos un siglo y medio, América Latina ha funcionado como una vasta cámara de resonancia para cuanta melodía política ha surgido de las regiones más civilizadas del hemisferio norte. Esto se acerca a su fin en parte como resultado de causas domésticas; en parte también porque las fuentes tradicionales de tantos modelos considerados dignos de imitación parecen estar exhaustas. Esto no significa que ha llegado el fin de las ideologías, sino más bien que ha terminado aquella época —breve en la perspectiva histórica— durante la cual las experiencias políticas, aspiraciones y recomendaciones provenientes de las playas del Atlántico norte eran invariablemente imitadas en América Latina.

Prácticamente todas las ideologías e interpretaciones políticas que entonces encontraron un eco simpático entre nosotros reflejaban esencialmente las experiencias resultantes de la influencia de la Revolución Industrial sobre las estructuras sociales de Europa Occidental que a su vez habían sido modificadas por fenómenos tales como el Feudalismo y la Reforma, ambos sin paralelo en la tradición histórica lusohispánica. Así, bajo nombres y estilos diferentes, conservantismo, liberalismo, radicalismo, comunismo, social-democracia y social-cristianismo (y sus variantes demócrata-cristianas), todos movimientos con profundas raíces europeas, han dominado la vida política de esta parte del mundo durante varias generaciones. Hasta el conservantismo, que podría quizás alegar cierto carácter secular o por lo menos preindustrial, nunca pudo en América Latina remontarse con éxito sobre la tremenda frontera psicológica en 1810 y retuvo un carácter republicano que lo colocó más cerca del conservantismo europeo moderno que de cualquier movimiento monárquico de corte irredentista y origen local. No hay necesidad de justificar este aserto respecto del conservantismo, ni del liberalismo, radicalismo o comunismo y en cuanto al halo de originalidad y modernismo que hoy adorna a los partidos social-cristianos de nuestra América Latina, cabe anotar que éstos están enraizados en aquellos que en su tiempo motivaron a sus precursores europeos, no sólo cuando le causaron difíciles situaciones políticas al Canciller Bismarck sino también cuando estremecieron los cimientos de la ortodoxia en aquella memorable reunión de obispos de Lambeth, realizada hace ya sesenta años.

Las disposiciones domésticas, políticas y económicas del llamado "mundo occidental", que en este respecto evidentemente incluye a la Unión Soviética, son en parte principal el resultado de las transformaciones causadas por el advenimiento de la Revolución Industrial de fines del siglo dieciocho y del diecinueve; pero ocurre que ésta llegó a su fin antes de alcanzar a América Latina. Indudablemente la industrialización ha llegado a nuestros países, pero sin las grandes transformaciones sociales que marcaron su aparición en el hemisferio norte. Aún más, la estructura social latinoamericana que recientemente ha recibido la tecnología industrial moderna es esencialmente diferente de aquella europea que la originó.

Hay aquí un complejo de diferencias culturales y sería difícil si no imposible, asignar prioridades o jerarquías de significación. Sin embargo conviene, siquiera como parte de la formulación de una hipótesis funcional, sugerir determinantes principales. Hecho este preámbulo necesario, me gustaría proponer tres diferencias fundamentales que en parte explican la aparente incapacidad latinoamericana para seguir proveyendo suelo fértil para los modelos ideológicos europeos y también ayudan a describir lo que yo llamaría "el estilo político" que creo caracterizará el acontecer latinoamericano futuro, tanto en lo doméstico como en lo internacional. Estas son, la ausencia en nuestra tradición histórica de las experiencias fundamentales del feudalismo, la disidencia religiosa y el desarrollo del poder político periférico característico de la Revolución Industrial en Europa. Al mismo tiempo, creo que es precisamente en la tradición centralista característica y vertebral de América Latina que se encontrará una explicación del desarrollo reciente e incluso una clave útil para la comprensión del futuro de la región.

*

La experiencia feudal como estructura de poder político y social no es parte de la tradición cultural de América Latina. Sin duda, la palabra es usada con frecuencia como término peyorativo para describir las relaciones entre terratenientes y campesinos en algunos lugares pero esto no debe oscurecer el hecho real que el fenómeno histórico del feudalismo, como relación entre el estado central y una periferia poderosa, nunca ocurrió en esta parte del mundo. Esta es una consideración importante puesto que el fenómeno del equilibrio de poder entre un centro relativamente débil y una periferia feudal relativamente fuerte fue uno de los ingredientes formativos del liberalismo pluralista europeo y de todas sus variantes social-demócratas.

A pesar de los esfuerzos realizados por los intelectuales de la Revolución Mexicana, los fundadores del APRA y otros, para establecer un linaje directo desde lo precolombino hasta lo contemporáneo, el hecho cierto es que América Latina nació a la vida moderna durante el siglo dieciséis, por lo menos trescientos años después del desaparecimiento del feudalismo de Europa Oc-

cidental. Su estructura institucional fue fabricada en un Madrid imbuido del renacimiento centralista y por la monarquía más poderosa que hasta entonces había conocido la cristiandad. Apenas hace falta recordar que Colón descubrió el nuevo mundo precisamente cuando el último baluarte morisco de Granada era conquistado por los reyes católicos poniendo exitoso fin a una lucha que en forma intermitente había durado casi siete siglos. La monarquía victoriosa dominó entonces sin contrapeso: los débiles intentos de desafío contra la autoridad central por parte de nobles descontentos y órdenes militares sólo tuvieron valor anecdótico. Con el poder temporal firmemente en sus manos, Fernando de Aragón obtuvo seguidamente del Papa Julio II, en 1508, la bula *Universalis ecclesiae regimini* que le entregaba *de jure* y a perpetuidad el poder eclesiástico sobre los nuevos territorios de América. La monarquía española obtuvo así el privilegio de presentación de sedes episcopales, monasterios y otros cargos principales que fue la base del patronato eclesiástico que tantas dificultades causara más adelante a los regímenes republicanos del siglo diecinueve.

De este modo, una generación antes que Enrique VIII de Inglaterra se enfrentara con el Papa en demanda de privilegios parecidos, el monarca español pudo reunir bajo su mano todo el poder temporal y prácticamente todo el poder eclesiástico sobre regiones que cubrían casi la mitad del globo terráqueo.

La estructura institucional que España diseñó para sus nuevos territorios de ultramar reflejó fielmente este acentuado centralismo. Las enormes distancias y las dificultades de comunicación no fueron suficientes para atenuar el poder que emanaba desde la metrópolis castellana: había poder suficiente en Madrid para dar fuerza a los brazos administrativos más largos de la Cristiandad. Incluso para cambiar un puesto de categoría menor en el Virreinato del Perú, era necesario contar con la anuencia de España; en cuanto a los altos dignatarios del régimen, a menudo el término de sus mandatos estaba marcado con un largo viaje a la península a enfrentarse al temido juicio de residencia.

Este sistema administrativo estructurado alrededor de una concepción eminentemente centralista pudo mantenerse en buen funcionamiento durante más de dos siglos. El proceso de descomposición que culminó con las revoluciones de 1810 no significó sin embargo un cambio esencial en esta modalidad centralista puesto que las revoluciones de la independencia no sólo fueron planteadas en primera instancia como esfuerzos legitimistas sino que al adquirir su carácter separatista, el centralismo madrileño pasó sin mayor atenuación a las respectivas capitales latinoamericanas. No está de más recordar que los movimientos de 1810 tienen más en común, por ejemplo, con aquel encabezado por Mr. Ian Smith en Rodesia que con movimientos genuinamente revolucionarios tanto en lo social como en lo político.

El centralismo político tradicional sobrevivió sin grandes dificultades las crisis y tensiones del siglo diecinueve. Indudablemente no es difícil encontrar casos de caciquismo, regionalismo e incluso federalismo pero aparte del hecho que la gran mayoría de éstos resultaron fallidos, un examen acucioso muestra que hasta los más vociferantes cabecillas regionales estaban a menudo usufructuando de las migajas del poder político que caían de la mesa del gobierno central.

Este centralismo tradicional ha llegado hasta nuestros días. Las tres principales revoluciones latinoamericanas —quizás las únicas que pueden ser llamadas por ese nombre— han reconstruido el edificio social y político obedeciendo a inspiraciones doctrinarias notablemente diferentes, sin embargo las tres han llegado a la institucionalización de regimenes de partido único. El PRI mexicano se ha transformado en un símbolo centralista por derecho propio; el régimen cubano, luego de algunas experiencias preliminares, ha desembocado también en un sistema de partido único y la explicación de esto, en mi opinión, tiene más relación con el hecho que Cuba participa de la tradición centralista latinoamericana con su novedoso comunismo. La revolución boliviana también hizo un esfuerzo importante por establecer un régimen de partido único bajo el MNR; el que esto fracasara no atenúa el significado del intento y no está de más recordar que el actual gobierno no ha hecho esfuerzos realmente eficientes por alejarse del centralismo de su predecesor. La tendencia que se percibe en otros países de la región —incluso haciendo caso omiso de las tiranías elementales— es claramente hacia la instalación de regimenes de partidos dominantes identificados directamente con el gobierno central, y esto tiene eco hasta en los regimenes más democráticos y sofisticados de la región.

Esta tradición histórica corre paralela con la tendencia universal hacia una mayor intervención estatal en todos los aspectos principales de la vida nacional. Pero mientras en países como Gran Bretaña, Suecia o Estados Unidos, esta tendencia choca contra un marco conceptual pluralista, periférico y más bien liberal de la responsabilidad política, en América Latina refuerza la corriente hacia un incremento cualitativo y cuantitativo del control centralizado.

De este modo se explica en parte por qué el hábito institucional del compromiso entre centros alternativos y coexistentes de poder político no es parte de la tradición histórica de América Latina. La experiencia feudal europea que obligó a las monarquías centrales y relativamente débiles a negociar con centros periféricos de poder es sencillamente desconocida en esta parte del mundo.

Pero si el centralismo político ha sobrevivido bastante bien durante los últimos cuatro siglos, lo mismo ha ocurrido con el centralismo religioso. No viene al caso discutir si acaso la disidencia religiosa es o no un ingrediente principal del liberalismo europeo, pero es muy difícil imaginar la tradición

liberal y social-demócrata del hemisferio norte en la ausencia de una actitud latitudinaria en materias de religión¹. En América Latina el problema no alcanza siquiera a plantearse puesto que nunca ha habido nada comparable con el fenómeno de la disidencia religiosa europea. En efecto, la autoridad central del catolicismo nunca ha sido desafiada desde adentro. Indudablemente ha habido fuertes movimientos anticlericales, pero iglesias incendiadas y sacerdotes asesinados no constituyen una alternativa viable al poder religioso central y la extraordinaria resistencia del catolicismo oficial se explica en parte por esta ausencia de desafíos significativos. He aquí por ejemplo un caso tan dramático como el de México, país en el que varias generaciones de revolucionarios han hecho del anticlericalismo parte principal de sus postulados y que incluso hoy día estima más fácil mantener relaciones diplomáticas con Cuba que con la Santa Sede y donde, sin embargo, el catolicismo mantiene sin dificultad su calidad de religión nacional.

La solución de esta falsa paradoja es bastante sencilla; las religiones complejas, así como las ideologías y sistemas filosóficos, sólo admiten comparación —y por ende, desafío— de sistemas equivalentes. El anticlericalismo no es una religión; ni siquiera admite las reglas del juego y por lo tanto no constituye una alternativa viable. Si de jugar ajedrez se tratara, el anticlericalismo sería el equivalente de darle un manotazo al tablero y echarlo al suelo con todas sus piezas: de ningún modo podría describirse ese gesto como un gambito ganador.

Cabe agregar que en la tradición histórica y política del área del Atlántico Norte, la disidencia religiosa recibió fuerte apoyo popular en las regiones más industrializadas. Incluso hoy día se puede observar que aquellas regiones de las Islas Británicas donde prevalecen las denominaciones disidentes, fueron también aquellas más afectadas por la Revolución Industrial. De la disidencia religiosa —dentro de un ámbito de tolerancia— a la disidencia política, hay una cortísima distancia y no precisa excesiva erudición el descubrir el ancestro religioso de la gran mayoría de los movimientos políticos reformistas que surgieron en el hemisferio norte durante los últimos cien años.

Hoy día en América Latina es evidente que hay disensiones internas en el catolicismo; pero antes que desacuerdos que pudieran llevar a un movimiento disidente en lo estrictamente religioso, éstas reflejan inquietudes sociales y políticas y no es fácil ver cómo pudieran evolucionar de modo tal que desembocaran en planteamientos doctrinarios alternativos. Incluso el crecimiento notable del protestantismo durante las últimas décadas no alcanza a constituir una alternativa real por lo menos a corto plazo. En Chile y Uruguay —que tienen las minorías no-católicas más significativas— los protestantes no pasan del 10% de la población.

¹ "Disidencia religiosa" parece ser la traducción menos mala de *religious non-conformity*.

Al centralismo político debe entonces agregarse el centralismo religioso como factor determinante en nuestro desarrollo histórico moderno. Un tercer factor es el centralismo económico, resultado de una larga tradición hispánica y además fuertemente reforzado por las circunstancias que han acompañado a la industrialización de América Latina.

Para explicar estas circunstancias es necesario describir brevemente aquellos aspectos del fenómeno europeo que se diferencian fundamentalmente de lo ocurrido en nuestro continente. En Europa y Estados Unidos, la actividad industrial surgió como resultado marginal de un modo de vivir; existía por lo menos desde principios del siglo diecisiete una compleja situación cultural y religiosa que al desarrollarse, resultó —entre otras cosas— en la acumulación de capital industrial por parte de ciertos grupos de personas con actitudes sociales, religiosas y económicas afines. Este proceso se desarrolló a través de un tiempo largo y debió poco o nada a la intervención directa del gobierno central. Por el contrario, es posible proponer que en algunos casos se hizo a pesar de la pasividad de las autoridades centrales y que indudablemente contribuyó a incrementar el poder de sectores periféricos, no sólo en lo social y político sino que muchas veces periféricos también en lo geográfico. He ahí los orígenes de la industria del hierro y del acero tanto en Gran Bretaña como en Alemania; o los primeros centros textiles. Indudablemente esta localización geográfica debió mucho a cuestiones de abastecimientos de materias primas, fuentes de energía y fuerza de trabajo pero cualesquiera las causas, el efecto fue que en épocas de grandes dificultades en las comunicaciones, estos centros industriales prosperaron lejos de la metrópoli y alejados de influencias gubernamentales. Es claro que más adelante el poder central pasó a representar los nuevos intereses, pero para que esto ocurriera los nuevos industriales tuvieron que desafiar exitosamente a las clases tradicionales. Hasta en Gran Bretaña los grupos manufactureros tuvieron que bregar muchos años para conseguir la reforma de 1832 que les entregó representación parlamentaria.

El crecimiento industrial en el área del Atlántico norte corrió paralelo con el desarrollo de los grandes centros urbanos. Industrialización y urbanización muestran una correlación casi directa. La tecnología era en esa época esencialmente trabajo-intensiva y para operar satisfactoriamente, la nueva industria necesitaba concentrar una fuerza de trabajo considerable en núcleos urbanos donde este proletariado adquirió una conciencia política diferente. Puede afirmarse, por consiguiente, que la incorporación de la industria moderna a la estructura social tradicional fue la consecuencia de la existencia de una nueva burguesía y resultó en la formación de un nuevo proletariado industrial.

Ninguna de estas consideraciones parece tener aplicación en el caso de América Latina. Aquí la industrialización ha sido un proceso de

substitución de importaciones causado principalmente —y en forma casi accidental— por factores externos como la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial². La tecnología industrial necesaria para llevar adelante este proceso ya había progresado lo suficiente para poder ser descrita como esencialmente capital-intensiva, necesitando una fuerza de trabajo relativamente reducida, mejor entrenada y recibiendo salarios relativamente elevados. Esta tecnología fue incorporada por una sociedad que ya poseía, con harta anticipación, una civilización urbana preindustrial compleja. Las decisiones que resultaron en la industrialización rápida de gran parte del ámbito latinoamericano no fueron de origen periférico sino que fueron tomadas directamente por el poder central y apoyadas decididamente a través de políticas de subvenciones, tarifas discriminatorias, canalización de crédito y programas de fomento industrial administrados por agencias estatales³. Finalmente, los cambios sociales tradicionalmente asociados con la industrialización europea y que muchos esperaron se reprodujeran en América Latina, no se han realizado; ha habido muchos cambios y muy importantes pero no han sido los esperados por estudiosos y políticos.

América Latina se ha industrializado rápidamente pero esto no se ha debido a los esfuerzos de una burguesía industrial ni ha resultado en la formación de un proletariado industrial. En la década de 1870, Gran Bretaña era la primera potencia industrial del mundo y recién alcanzaba la cifra de un millón de toneladas de acero. Para producirlas, necesitó de una fuerza de trabajo de algo menos de 400.000 hombres. Hoy día son varios los países de América Latina que han superado esa importante frontera siderúrgica —Brasil ya se está acercando a los cuatro millones de toneladas— y un cálculo muy crudo permite estimar que la fuerza de trabajo necesaria para la producción de un millón de toneladas apenas si excede 7.000 hombres. Perú es la primera potencia pesquera del mundo, pero la fuerza de trabajo necesaria para levantar y procesar nueve millones de toneladas de pescado no excede los 30.000 hombres: una cifra de producción comparable hace cien años hubiera demandado varios cientos de miles de hombres. Estos ejemplos ilustran lo abundantemente conocido: la tecnología industrial ha cambiado fundamentalmente y es ahora capital-intensiva. Por lo menos por esta razón, la fuerza de trabajo industrial de América Latina no es comparable con aquella que hizo la revolución industrial europea y desde luego no puede ser descrita como un proletariado industrial clásico. Debe trabajar con una tecnología bastante compleja y adelantada que exige una preparación mayor; es muchísimo más pequeña y, en parte por estas razones, en parte como resultado de la vigencia de legislación social y

²Los efectos de la crisis de 1929 en la iniciación del proceso de industrialización masiva fueron principalmente importantes en Brasil. Ver Celso Furtado, *The Economic Growth of Brazil*, University of California Press, 1963, pp. 203-224.

³Esta generalización —como todas las que se refieren a América Latina— admite excepciones. Es claro que el papel de la empresa privada en Colombia y Venezuela ha sido más importante que, por ejemplo, en Brasil, México y Chile, pero subsiste la duda de si hubieran podido hacer todo lo que hicieron sin apoyo estatal decidido.

actividades sindicales inexistentes en la Europa del siglo pasado, recibe mejores salarios que el promedio de los otros sectores laborales. En este sentido constituye una especie de aristocracia laboral con ingresos que frecuentemente superan los de grupos importantes de trabajadores en el sector terciario. La capacidad de la industria de absorber gran cantidad de trabajadores es limitada y esto ha transformado en un mito la esperanza de que un crecimiento industrial acelerado pudiera transformar a parte significativa de la masa rural en una masa urbana e industrial. Con suerte, el emigrante rural encuentra empleo en industrias menos exigentes, como la de la construcción, pero más a menudo gravita hacia el sector servicios.

El crecimiento de la industria moderna resultó en una fuerte reducción en el número de los artesanos y los pequeños talleres y un aumento en el número de personas empleadas en el sector terciario. Pero este aumento no reflejó un cambio cualitativo sino que sólo la acentuación de una de las características interesantes de nuestra sociedad urbana. A fines del siglo diecinueve, cuando prácticamente no existía la industria moderna en América Latina, nuestras ciudades capitales albergaban una proporción muy elevada de nuestra población. Uruguay, México, Argentina y Chile no eran naciones industriales antes de la Primera Guerra Mundial pero sus capitales se contaban entre los grandes núcleos urbanos del mundo. Uruguay sigue siendo esencialmente un país agrícola y más de la mitad de su población habita en Montevideo. El grado de urbanización de América Latina es extraordinario; hoy día tiene una proporción mayor que Europa de su población urbana en ciudades sobre 100.000 habitantes y obviamente no se encuentra tan industrializada como el Viejo Mundo.

Esta urbanización preindustrial de América Latina ha sido llevada sobre los hombros de un vasto sector terciario que durante el siglo pasado se alimentó indirectamente de los ingresos de la exportación de materias primas. Las grandes urbes crecieron desmesuradamente durante la segunda mitad del siglo diecinueve reflejando la prosperidad del salitre, caucho, carnes, lana, café y cuanto otro producto nuestro tuvo buenos mercados en el hemisferio norte. Pero en las ciudades no residían los caucheros, mineros o vaqueros sino que un enorme conglomerado de empleados de cuello y corbata, descendientes del ejército de escribanos y burócratas que el imperio español necesitó para administrar sus vastos dominios de ultramar y, junto a ellos, profesionales, empleados públicos, servidores domésticos, comerciantes y pequeños artesanos. Este sector medio, enfáticamente urbano, no es de ningún modo el equivalente latinoamericano de, por ejemplo, la burguesía industrial británica o la clase media francesa o estadounidense. Desde luego su asociación con la industria es mínima o inexistente: además está directa o indirectamente asociada con el estado, ya sea a través de su empleo o por su dependencia del sistema de seguridad social u organismos subsidiarios. Quizás por esta razón sus importantes actividades políticas y sindicales

tienden a ser esencialmente reivindicativas y dirigidas a obtener una participación mayor dentro de la estructura social vigente antes que a su demolición y reemplazo por otra más igualitaria.

Este sector terciario, tan esencialmente latinoamericano, es el eje y principal elemento de la actividad política en nuestro continente; si se precisara un símbolo para representarlo, no podría ser éste ni un campesino desposeído ni un proletario industrial explotado, sino un empleado de banco, mal pagado y con aspiraciones sociales.

En cuanto a la burguesía industrial, reformista, antiaristocrática, aventurera, innovadora y creadora, parece que ésta sencillamente no existe en nuestro continente. Las funciones dinámicas del cambio económico y social han sido realizadas por entidades estatales y la empresa privada rara vez ha prosperado sino al abrigo de la protección del gobierno central. Si los subsidios, tratamientos preferenciales, créditos y granjerías similares otorgadas por el estado fueran negadas a la llamada empresa privada de la región, bien poco sería lo que quedaría en pie.

Más aún, el grupo social generalmente denominado clase media —aun violentando los términos de la descripción— no ha sido capaz de crear un complejo cultural propio, mientras que su enriquecimiento, más que el producto de su esfuerzo u originalidad, ha sido el resultado de su proximidad con la cornucopia gubernamental de las décadas de 1940 y 1950. Ellos y su clientela comercial y política no son industriales en el sentido generalmente aceptado de la palabra, aun cuando sean propietarios de industrias, puesto que con frecuencia inquietante aparecen dispuestos a cambiar los riesgos y responsabilidades inherentes por un acuerdo con alguna compañía extranjera que a través de patentes y licencias de producción los ponga al abrigo de la competencia local. Estos acuerdos les aseguran un buen ingreso y les entregan, por añadidura, la asesoría técnica, financiera y publicitaria que necesitan para predominar dentro de un mercado restringido.

Aún más, la docilidad, falta de imaginación y dinamismo de esta pseudoburguesía industrial le ha impedido incluso llegar a constituir un grupo de presión importante excepto en un sentido negativo, como lo demuestra, por ejemplo, la resistencia de agrupaciones de comerciantes e industriales privados a los planes de integración regional. Sin embargo, estos mismos grupos no han podido nunca —aun cuando han tratado— generar un complejo ideológico que pudiera llevar a la formación de una fuerza política viable que les represente. No existe, así, el equivalente latinoamericano del liberalismo industrial europeo excepto a un nivel de parroquialismo pintoresco.

Más importante quizás, como lo ha hecho notar Celso Furtado, es que sean precisamente los más eficientes y modernos entre estos propietarios de industria los que con más facilidad entran en la órbita externa financiera, tecnológica y económica, en detrimento de una política de desarrollo

nacional realmente efectiva⁴. En Europa y Estados Unidos fueron precisamente los grupos industriales los que por varias razones jugaron un papel preponderante en el planteamiento y realización de la política de desarrollo nacional; en América Latina, por el contrario, aparecen como responsables de la intensificación de los procesos que llevan a la dependencia externa.

No han podido tampoco cumplir con el papel de reformistas sociales y culturales que les hubiera correspondido si en realidad tuvieran las características de sus precursores europeos y lejos de desafiar exitosamente a los grupos tradicionales se han deslizado suavemente por la pendiente de la imitación formal y la emulación de los hábitos de la clase alta. No sería extraño que la principal contribución de estos sectores medios a la vida contemporánea de América Latina fuera precisamente la institucionalización del arribismo social.

*

No parece haber, por consiguiente, evidencia substancial que muestre que la tradición histórica de centralismo esté siendo desafiada desde adentro. Más aún, los grandes grupos de presión que en Europa y Estados Unidos jugaron papeles importantes en la tarea de adelantar las reformas que en su tiempo demandó la incorporación de la moderna tecnología industrial, aparecen en nuestro continente o incapaces de sobrellevar esta responsabilidad o faltos de interés por hacerlo. Este aserto deja abierta la interrogante sobre cuál puede ser el sector social que podrá desempeñar este papel en un futuro próximo.

Del concepto de la instrumentalidad del estado generalmente utilizado y aceptado en Gran Bretaña y Estados Unidos, se derivan nociones y postulados que enmarcan sutilmente la tarea académica de muchísimos sociólogos y científicos políticos preocupados de los asuntos latinoamericanos. Así es como ilustrados estudiosos extranjeros de América Latina han invertido tiempo y esfuerzo tratando de identificar los grupos de presión que están compitiendo para ganar el control de aquella herramienta presumiblemente inerte: el estado central. Estos estudios están claramente basados en un concepto liberal —aun cuando obviamente compartido por el marxismo europeo clásico— del estado central que lo entiende como un instrumento más bien pasivo, inevitablemente utilizado por uno u otro grupo para adelantar sus intereses. Un examen de los escritos más recientes sobre estos

⁴Ver Celso Furtado, *La concentración del poder económico en los Estados Unidos y sus proyecciones en América Latina*, *Estudios Internacionales*, octubre 1967. Es importante hacer notar que el concepto de desarrollo utilizado en este trabajo es aquel definido por el Profesor Osvaldo Sunkel en su estudio *El concepto del desarrollo*, ILPES, Santiago, marzo de 1966. Ver también, Osvaldo Sunkel, "Política nacional de desarrollo y dependencia externa", *Estudios Internacionales*, abril 1967.

temas publicados en el hemisferio norte indica que diferentes autores estiman que diversos grupos de presión están en posición más favorable para asumir la responsabilidad de adelantar lo que pasa vagamente por "modernización". Hay quienes creen que este liderazgo lo asumirán los sectores medios en ascenso; otros sugieren que serán los grupos "nasseristas" dentro de las fuerzas armadas los que aceptarán esta responsabilidad; hay quienes tienen esperanzas o temores de que sea un levantamiento campesino el que actúe como motor social y político y lleve a la reforma de toda la vieja estructura mientras que recientemente no han faltado quienes atribuyen este liderazgo potencial a los grupos estudiantiles de vanguardia.

Me parece que este tipo de especulación no resultará fructífero, porque en general está basado en la creencia que el estado latinoamericano será en el futuro tan instrumental y sensible a las presiones de los grupos periféricos como lo ha sido hasta ahora. Aun cuando tanto las tesis como las antítesis que se propongan en este terreno son especulativas, creo acertado afirmar que no es razonable proyectar hacia el futuro latinoamericano basándose en un concepto estéril, marginal e imitativo del estado central. En este sentido, incluso las diferencias obvias que en cuanto al desarrollo y actividades del estado se notan en diversos países de América Latina, deben interpretarse como divergencias direccionales que conjuntamente muestran una tendencia hacia una mayor preocupación estatal por todos los asuntos nacionales.

En lugar de pensar en la supervivencia o resurrección del estado liberal del siglo diecinueve, estimo que debemos pensar más bien en un gigante dormido que recién empieza a despertar; en un grupo de presión actual y potencialmente fuerte, que extiende su poder a través de burocracias centralizadas, complejos servicios de seguridad social y un patronazgo que prácticamente ha transformado todo el ámbito urbano en una vasta clientela institucionalizada; un grupo de presión aun relativamente pasivo pero que controla los mayores centros académicos y es capaz de ejercer influencia decisiva sobre las economías nacionales.

Quizás las únicas instituciones que, atendido su carácter relativamente autónomo, pudieran considerarse como centros rivales de poder, serían la iglesia y las fuerzas armadas. Pero ambas, casi por definición, lejos de ser pluralistas o periféricas, tienden precisamente a una acentuación del centralismo estatal, con la excepción notable de las controversias entre la iglesia y el estado sobre el derecho de patronato en el siglo pasado, pero éstas, como bien se sabe, están totalmente superadas hace varias generaciones. Las fuerzas armadas poseen una concepción de la responsabilidad nacional que excluye toda dispersión o atenuación del poder central mientras que las preocupaciones contemporáneas del establecimiento eclesiástico buscan un acrecentamiento del papel social y económico del estado precisamente para resolver los más graves problemas planteados por la pobreza y la explotación de los desposeídos.

Probablemente el estado central, como grupo de presión principal y básico, no ha ejercido antes de ahora una influencia más decisiva porque durante los cien años que preceden a la crisis de 1929, las condiciones que prevalecieron en América Latina hicieron prácticamente innecesaria una intervención significativa del estado, acorde con su capacidad y poder. Los grupos rectores de la sociedad latinoamericana gozaron durante ese siglo de una prosperidad notable y esto coincidió con una época en que la vanguardia intelectual europea estaba estrechamente comprometida con los postulados del liberalismo económico. De allí que con la misma asiduidad y entusiasmo con que estos grupos importaron modas inglesas, arquitectura francesa y ópera italiana, importaron también el liberalismo británico como dorado manto para cubrir sus desnudeces doctrinarias. La creciente demanda europea por los productos primarios de América Latina hacían de esta aceptación del *laissez faire* no solamente algo social e intelectualmente atractivo sino que también algo sumamente agradable desde el punto de vista comercial y financiero. La aparente pasividad del estado central no fue por lo tanto algo impuesto desde afuera, sino el resultado de una decisión —o quizás el vocablo correcto debería ser omisión— interna basada en una situación de prosperidad objetiva de los grupos rectores. En este sentido, vale la pena recordar que Sarmiento no estaba solo cuando argumentaba que América Latina se civilizaria en la medida que imitara eficientemente todo lo europeo.

La crisis de 1929 puso fin a este prolongado período de prosperidad; el manto de liberalismo pluralista y periférico importado desde Europa se deshilachó y empezó a perfilarse lentamente el resurgimiento del centralismo político tradicional. Este fenómeno coincidió con la incorporación masiva de la tecnología industrial moderna, pero las presiones externas generadas por la Segunda Guerra Mundial postergaron por algunos años el resurgimiento nacionalista que de otro modo hubiera acaecido simultáneamente. Durante la Segunda Guerra Mundial nuestro continente estuvo claramente dentro de la esfera de influencia directa de las naciones aliadas y —aparte de la adhesión entusiasta y sincera que muchos de estos países prestaron a la causa democrática— hubo presiones importantes para asegurar la participación activa de todos y cada uno de ellos en el esfuerzo bélico. Esto resultó en una pausa política que se reflejó tanto en lo doméstico como en lo internacional.

Además, el sentimiento generalizado de repulsión contra un nacionalismo desbocado al que se atribuyó la responsabilidad de iniciar la guerra coloreó todo atisbo de inclinación nacionalista en los movimientos políticos del mundo occidental. Terminada la guerra, los aliados victoriosos procedieron a la formación de la Organización de las Naciones Unidas que en cierto modo simbolizó el repudio a las formas tradicionales de nacionalismo y un nuevo y

sincero compromiso con ideales internacionales que se esperaba impedirían la repetición de la tragedia bélica.

Difícil tarea hubiera sido en esos momentos, haber levantado banderas nacionalistas en América Latina; el internacionalismo fue aceptado como una nueva religión y la moral vigente era la de la cooperación a través de las fronteras.

Pero no pasó mucho tiempo antes que el mundo se viera dividido por una nueva confrontación. El Presidente Truman en su famosa declaración doctrinaria de 1947, planteó la división del mundo en dos grandes campos: a un lado las democracias y al otro las dictaduras totalitarias. La iniciación de la Guerra Fría enfrentó a América Latina con un falso dilema formidable. Aparte del hecho claro que las alternativas planteadas por el Presidente Truman no correspondían a la realidad puesto que había suficientes dictaduras en el campo democrático como para hacer vacilar al menos perspicaz, era evidente que los partidos comunistas latinoamericanos no estaban embarcados en una política revolucionaria como la que se les atribuía en los postulados definitorios del conflicto. Un examen detallado de la conducta de estos partidos durante las últimas décadas lleva a la conclusión que sólo en dos oportunidades —El Salvador en 1932 y Brasil en 1935— participaron directamente en acciones violentas, cuyo objetivo era apoderarse del gobierno central⁵. En este sentido, estos partidos han reflejado la actitud eminentemente pragmática de la Unión Soviética que ha aceptado el hecho que América Latina se encuentra dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. Sin embargo, aun cuando estos factores eran sobradamente conocidos por quienes conducían los asuntos políticos de la región, las presiones generadas por la Guerra Fría impusieron una situación en la que el anticomunismo fue ascendido al status de dogma necesario. Se dio abundante publicidad al supuesto peligro de subversión e incluso muchos políticos sensatos se sumaron al coro que clamaba en contra del peligro rojo, sabiendo perfectamente que esto no pasaba de ser un arbitrio algo frívolo para asegurar la amistad y el flujo abundante de ayuda material estadounidense.

Casi inevitablemente el curso de la política doméstica de América Latina fue determinado en sus grandes líneas por las alternativas de la gran confrontación mundial; todo intento, legítimo o no, de realizar una política exterior independiente fue decididamente resistido por Estados Unidos; todo atisbo de inclinación nacionalista fue calificado tan duramente como si se hubiera tratado de un desafío frontal; toda crítica a la política seguida por Washington, cualquiera su legitimidad, fue neutralizada con la acusación de tener inspiración comunista. De este modo no fue posible que se desarrollara en América Latina, paralelamente con el proceso de

⁵ Para un análisis detallado de este aspecto del problema, ver, Ernst Halperin, *Nationalism and Communism in Chile*, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 1965, p. 13.

industrialización y la acentuación del centralismo, una actitud hacia los asuntos internacionales que estuviera enraizada en una comprensión de los intereses específicos de cada una de estas naciones. Por el contrario, quince años de Guerra Fría dejaron como herencia un sentimiento incómodo e insidioso de que el fenómeno había llevado a una mayor dependencia política; los países de América Latina se vieron demasiado a menudo como humildes comparsas habituados a aplaudir y callar de acuerdo con las indicaciones de la nación rectora de la coalición occidental.

Esta subordinación de los intereses nacionales frente a las demandas militares y políticas de la Guerra Fría, no afectó solamente a nuestro continente. El resto del mundo —a ambos lados de la cortina de hierro— tuvo que aceptar la creación de una serie de organismos supranacionales destinados a neutralizar el peligro de una posible agresión militar. Así surgieron la OTAN, la SEATO, el Pacto de Bagdad, la CENTO, el Pacto de Varsovia y la OEA. De todas, quizás esta última haya sido la menos impresionante pero asimismo fue la entidad que reflejó el concepto de internacionalismo que dominó las escaramuzas de la Guerra Fría en esta parte del mundo. Durante los años cruciales de la confrontación, tanto Washington como Moscú aparentemente definieron “internacionalismo” como la lealtad con que los países de sus respectivas órbitas apoyaban los planteamientos hechos por las potencias líderes ante estos organismos supranacionales. Pero para aquellos latinoamericanos no comprometidos con las potencias, la Guerra Fría aparecía más bien como un enfrentamiento de dos poderosos nacionalismos que exigían —con cierta legitimidad brutal— el apoyo leal de sus respectivas clientelas y justificaban esta demanda haciendo notar el peligro inminente de una agresión por parte de la potencia rival.

Sin entrar en discusión sobre el significado real del vocabulario de la Guerra Fría en que palabras como agresión, subversión, democracia, dictadura, libertad y tiranía, perdieron gran parte de su significado, es perfectamente lícito mantener que por una u otra razón, los temores que ambos contrincantes abrigaban sobre la probabilidad o inminencia de una *invasión armada* de parte del adversario nunca se justificaron. Aún más, incluso con el caso de Checoslovaquia en mente, es también indudable que la probabilidad de que se realice un ataque soviético contra Europa Occidental o de parte de Estados Unidos contra cualquier país de la órbita comunista es remotísima. En cierto sentido, los desafíos de China, Rumania, Cuba y Yugoslavia son más importantes para la Unión Soviética que aquél representado por Estados Unidos. Igualmente, desde un punto de vista político, la actitud de Francia, la vacilación de Alemania Occidental, y, en general, la notoria falta de apoyo de parte de sus aliados europeos, presenta a Estados Unidos con un problema hartamente más serio que aquél planteado actualmente por la Unión Soviética. Es evidente que ha habido un acercamiento

notable entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante los últimos años y aun cuando no es posible vaticinar si esta tendencia se mantendrá invariable, la *détente* ha contribuido a ahuyentar el fantasma de un conflicto nuclear.

A medida que desciende la marea de la Guerra Fría, afloran los picachos de los intereses nacionales que no habían sido eliminados, sino solamente sumergidos. De ahí el notable auge nacionalista que se extiende a través de todo el globo y que ha postergado las exigencias doctrinarias tanto del comunismo ortodoxo como de sus detractores. Hay un innegable retorno de la fluidez a la política internacional y esto es a la vez causa y efecto del fin de la Guerra Fría.

El resurgimiento nacionalista afecta a América Latina en un momento en que se extiende por los círculos políticos e intelectuales la convicción que los modelos interpretativos de los cambios económicos y sociales, basados en las experiencias del hemisferio norte, sencillamente no tienen aplicación en esta parte del mundo. Esto coincide con un sentimiento generalizado de que uno de los problemas principales de América Latina es aquél relacionado con la creciente dependencia externa, tanto en lo económico como en lo cultural y político.

En la ausencia de un marco ideológico complejo, los conglomerados sociales tienden a aceptar lealtades políticas elementales con sorprendente docilidad. En otros lugares del globo éstas pueden ser tan sencillas como la lealtad con la tribu o con la familia; en nuestro continente el equivalente es el nacionalismo. Este sentimiento no es intelectualmente exigente; llega automáticamente a toda la población políticamente significativa con un mínimo de esfuerzo y facilidades materiales y por ende, rebasa las fronteras internas, sean éstas sociales o políticas.

Constituye el nacionalismo, por consiguiente, un acicate formidable aun cuando su gran poder dinámico no esté necesariamente acompañado por un contenido que garantice realizaciones positivas. El nacionalismo puede constituir un puente entre un presente incierto y un futuro satisfactorio pero el tránsito no está exento de peligros. Por definición, el nacionalismo mira allende las fronteras, así sea defensivo u ofensivo y tiende a exagerar la influencia de los factores externos sobre la situación doméstica. Incluso cuando está basado en una comprensión civilizada de los problemas del país, el nacionalismo tiende a crear fricciones internacionales que se hacen tanto más serias cuanto más exitoso es en adelantar una política de afirmación nacional. Un fenómeno con estas características generales afectando simultáneamente a los principales países de América Latina y coincidiendo con planteamientos integracionistas podría tener repercusiones serias. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que el fantasma de los sistemas de equilibrio de poder dentro de América Latina que muchos creyeron desaparecido con el siglo diecinueve, ha vuelto a deambular por los pasillos

de las cancillerías. Si a esto se agrega la política armamentista de algunos países latinoamericanos, cabe poca duda que los riesgos que se perfilan en nuestro horizonte político no son minúsculos.

Al mismo tiempo sería absurdo ignorar el hecho que uno de los objetivos principales del nacionalismo latinoamericano es atenuar la relación de dependencia respecto de Estados Unidos. Esta aspiración, para ser justo, pareciera reflejarse también en algunos pronunciamientos hechos por el gobierno estadounidense, en los que se aboga por que nuestros países hagan un esfuerzo nacional más importante para adelantar los programas de desarrollo. Por supuesto, es también posible que las dificultades financieras por las que atraviesa el país del norte hagan esto obligatorio y no opcional. De todas maneras, conviene recordar que la conducción independiente de los asuntos nacionales no puede ser limitada fácilmente; si un país actúa independientemente respecto de la programación y realización del desarrollo económico, tenderá naturalmente a actuar con independencia en lo que a su política exterior se refiere.

Hay algunos hechos que indican que la actitud latinoamericana hacia Estados Unidos podría estar en vísperas de sufrir un vuelco. No se trata, en este caso, de un retorno al antiyankismo furibundo asociado con la extrema izquierda durante los años de la Guerra Fría sino más bien a un distanciamiento sutil y generalizado que no tiene color político y que parece crecer paralelamente con el resurgimiento nacionalista.

Por ejemplo, los grupos militares latinoamericanos que hasta hace muy poco eran considerados sostenedores incondicionales y entusiastas de cuanta sugerencia emanara de Washington, parecen estar adoptando una actitud más crítica. Esto se debe en algunos casos a la negativa de parte de Estados Unidos a facilitar la compra de armamentos —cosa que ha provocado comentarios bastante severos de parte de altos jefes militares— pero también a un sentimiento nacional genuino que ve en la ingerencia excesiva de Estados Unidos en nuestros asuntos un obstáculo principal para la realización de programas de desarrollo. Finalmente, no escasean grupos militares que estiman que los actuales planes integracionistas son el eco simpático de directivas originadas en Washington y poco o nada tienen que ver con los mejores intereses de América Latina.

Luego los movimientos estudiantiles que han surgido en muchos de nuestros países, aun teniendo orígenes, objetivos y colores políticos diversos, parecen compartir una preocupación esencial por el desarrollo de la investigación como única medida eficaz para aminorar la penetración cultural estadounidense y la dependencia de nuestros países en materia científica y tecnológica. Estas aspiraciones, vale la pena agregar, además de no tener filiación política, corresponden a planteamientos hechos por grupo cuya extracción social es de clase media hacia arriba.

Más aún, entre los escombros que quedaron luego del silencioso desmoronamiento de la Alianza para el Progreso, se pueden encontrar varios movimientos social-demócratas que estiman, con o sin justificación, que los Estados Unidos no cumplieron con los compromisos contraídos cuando se lanzó la idea en Punta del Este. Consideran que aun cuando ellos se jugaron por entero en un esfuerzo por realizar las reformas estructurales pedidas, el gobierno estadounidense se abstuvo de apoyarles con el entusiasmo y medios materiales necesarios. La frustración de estos grupos, sin embargo, es mínima si se la compara con la de los partidos de la derecha tradicional que habiendo entregado su apoyo leal y sostenido a prácticamente todas las iniciativas políticas estadounidenses durante las últimas dos décadas; habiendo enfrentado la fuerte oposición doméstica a medidas tales como la invasión de Playa Girón y el derrocamiento del gobierno guatemalteco, se sintieron absolutamente traicionados por la decisión de la administración Kennedy de proponer un programa de reformas cuyo resultado, de haberse realizado exitosamente, no hubiera sido otro que el minar definitivamente las bases de su apoyo económico y político.

En cuanto a la integración latinoamericana, se advierte preocupación por el carácter del actual proceso, especialmente a causa de su proximidad excesiva con las iniciativas, financiamiento y apoyo estadounidenses. Se ha notado que de los tres organismos internacionales que se ocupan preferentemente de la integración —el Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio— los dos primeros, que además son los más fuertes, están basados en Washington y funcionan principalmente a través de la utilización de recursos financieros de procedencia extralatinamericana; el tercer organismo es el único fundamentalmente latinoamericano y su funcionamiento no puede ser calificado como un éxito impresionante. Se ha precisado —incluso en reuniones académicas de alto nivel— que lo que se necesita es una integración realmente latinoamericana en lugar de la actual que es inquietantemente interamericana, y que permite de uno u otro modo que Estados Unidos mantengan una influencia excesiva en el proceso.

Suponiendo que existe en América Latina una acentuación del centralismo político tradicional; que el resurgimiento nacionalista mundial se refleja también en nuestro continente y que una de sus aspiraciones más sutilmente importantes es la de evitar o aminorar substancialmente la dependencia cultural, económica y política, es razonable pensar que en el futuro cercano se pueden plantear algunos problemas de importancia entre los cuales se destacan los siguientes:

En primer lugar, es muy posible que las relaciones entre América Latina y Estados Unidos entren en un periodo difícil. Sin embargo, las dificultades no se producirán necesariamente entre la extrema izquierda clásica de

América Latina y el gobierno estadounidense, sino que el desafío tendrá su origen en los grupos de presión estatales latinoamericanos. Este desafío central y nacionalista tendrá un color político muy difícil o imposible de clasificar de acuerdo con los cánones tradicionales de derecha e izquierda, puesto que la actuación de estos gobiernos se caracterizará por un acentuado pragmatismo. Contra este desafío latinoamericano los Estados Unidos posiblemente se muestren más vulnerables de lo que podría pensarse pues todo su arsenal político, militar y —quizás aún más importante— conceptual, está orientado contra un posible ataque desde la extrema izquierda encontrándose el aparato gubernamental estadounidense relativamente indefenso frente a una confrontación que no tenga ese carácter elemental, definido de acuerdo con las añejas normas impuestas por la Guerra Fría

En segundo lugar, es posible que el resurgimiento nacionalista dificulte el programa integracionista latinoamericano; esto será más evidente cuanto más estrecha sea la relación que exista entre el proceso integracionista y el apoyo e iniciativas de Estados Unidos. Esto, sin embargo, seguramente encontrará una solución expedita a través de planteamientos integracionistas genuinamente latinoamericanos que concilien las demandas nacionales con las de la integración dentro de un programa realista, orientado hacia la ruptura del marco de dependencia externa que limita el desarrollo de nuestros países. Quizás la creación del Grupo Andino sea una de las iniciativas más decididas y promisorias que se han adoptado en este sentido.

En tercer lugar, la restauración de la fluidez en los asuntos políticos internacionales agregada al auge nacionalista que seguramente continuará por algún tiempo, resultarán en responsabilidades crecientes para los gobiernos centrales, que se traducirán en una mayor ingerencia estatal en todos los aspectos de la vida nacional. Tal tendencia llevará también a una revisión substancial del papel de la empresa privada, tanto extranjera como doméstica. Es posible, por ejemplo, que el principal vehículo de desarrollo integrado —suponiendo que el proceso de integración cambie de carácter y adquiera un nuevo impulso— sea la empresa estatal multinacional y no la empresa privada.

Finalmente, es muy probable que nuestra América Latina esté viviendo los comienzos de un proceso que llevará a la definición de un estilo político nuevo, firmemente enraizado en una tradición autóctona, centralista y democrática. Paralelamente esto podría llevar a la elaboración exitosa por parte de la *intelligentsia*, de un modelo de desarrollo integral basado en la situación real de América Latina.

Existen peligros muy reales, sin embargo, que pueden impedir que estos beneficios se logren fácilmente. La coincidencia —quizás funcional— entre el resurgimiento nacionalista, la fluidez en la política internacional y la

resurrección de esquemas de equilibrio de poder, con los planteamientos integracionistas que inevitablemente demandarán sacrificios calificados de posiciones soberanas, difícilmente dejará de causar fricciones complejas entre los países de América Latina. Si a esto se agrega el evidente interés de varios gobiernos —a veces muy legítimo— por modernizar equipos bélicos, adquirir autosuficiencia en la fabricación de algunos armamentos o superioridad neta en la posesión de otros, se están acumulando factores objetivos que, a la luz de la experiencia colectiva de la humanidad, generalmente resultan en serias situaciones conflictivas.

En el no menos importante terreno de la reflexión y el análisis intelectual también se corren riesgos significativos. De éstos quizás el más grosero —mas no por esto menos inquietante— sea el de deslizarse por los fáciles e indecorosos caminos del romanticismo xenofóbico en lugar de proceder a la difícil búsqueda de soluciones propias, enmarcadas dentro de una comprensión civilizada y eficiente de aquello que nos hace cualitativamente diferentes.

Nuestro continente se ha caracterizado últimamente por su producción abundante y de muy elevada calidad en la literatura y las artes —quizás las mejores novelas contemporáneas han sido escritas durante los últimos diez años por peruanos, argentinos y colombianos— pero no se ha logrado igual distinción en el campo de las ideas políticas y sociales. Esto se ha debido por lo menos en parte a la asiduidad con que en el pasado nuestros intelectuales han imitado aquellos modelos europeos o estadounidenses que consideraban ejemplarizantes. Peor, no sólo buscaron respuestas sino que también interrogantes y ésto nos ha llevado a una posición de dependencia cultural tan grave, que es concebible admitir que sólo el acicate peligroso de un fuerte resurgimiento nacionalista nos permitirá alejarnos de este lugar histórico tan poco satisfactorio.